

# Informe sobre la Propuesta de Pago por Servicios Ambientales en México

John Burstein  
FORO para el Desarrollo Sustentable, A.C.  
San Cristóbal de las Casas, Chiapas  
México, agosto de 2000

## RESUMEN EJECUTIVO

Por la variedad topográfica y su situación de puente geográfico mesoamericano, se le confiere a México la condición de "megadiversidad", con el lugar 12 en número de especies, y con recursos hídricos y forestales que merecen un interés nacional, y, a la vez, internacional, en cuanto a su conservación y mejoramiento.

Sin embargo, México, como muchos de los países con economías en rápido desarrollo, está inmerso en procesos de industrialización y urbanización, con problemas graves de contaminación, del aire en los centros urbanos y del agua, y con una sobre-explotación de los recursos naturales, como consecuencias. Desde medianos del siglo pasado, la "revolución verde" — en la cual México sirvió de vanguardia — y la expansión de sistemas agropecuarios campesinos sobre terrenos forestales, han provocado la destrucción o empobrecimiento de ecosistemas y la erosión masiva.

Desde los años 1970, México ha reconocido la necesidad de buscar un equilibrio entre el desarrollo industrial y el desarrollo "sustentable" con conservación de recursos naturales. Su historia durante el siglo XX le puso delante elementos claves para esta búsqueda. Partimos de que la Constitución identifica a la nación como el dueño de los recursos naturales de la tierra y subsuelo en forma de propiedad común, y el Estado como administrador directo, o con la transferencia a particulares individuales o colectivos (de ejidos campesinos o bienes comunales indígenas). La iniciativa popular de la nacionalización de la industria petrolera (1937) reforzó el papel del Estado Rector económica y ambientalmente. El sector campesino, pilar fundamental en el modelo corporativista del partido oficial (PRI), reclamaba con éxito los terrenos baldíos selváticos. La primera generación de leyes ambientales, entonces, se limitó a incursionar en el control de la contaminación industrial.

Para finales de los años 80, la protección del ambiente comenzó a perfilarse; la creación de áreas naturales protegidas (ANP) pronto resultó estratégica. Al mismo tiempo organizaciones civiles (o no-gubernamentales) conservacionistas y ecologistas emergieron con agendas de denuncia contra abusos en el modelo económico (el aire contaminado por los autos, la industria destructora de hábitats, etc.) y de reclamo al Estado para que asumiera su papel de protector de los recursos naturales. Con aptitudes progresistas en la arena internacional, el gobierno mexicano figuró en el movimiento ambientalista pos-Rio/92, y fue de los primeros ratificadores del Protocolo de Kioto. Un aparato gubernamental mínimo respetable (la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales, y Pesca, 1995) de ideología avanzada en el ámbito del desarrollo sustentable y la conservación se armó, al mismo tiempo que el país optó por la globalización radical (Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLC).

Si bien los actores incluyen el sector campesino y las organizaciones civiles (a veces logrando alianzas tácticas), existen leyes ambientalistas nacionales e internacionales, y con instituciones públicas profesionales comprometidas con el ecologismo, la correlación de fuerzas favorece a la Secretaría de Hacienda y al sector empresarial, cuya visión del equilibrio sesga más hacia el desarrollo industrial que el desarrollo sustentable.

Tal vez por lo mismo, las experiencias que emplean estrategias de Pago por Servicios Ambientales (PSA) son incipientes en México. Y por eso no dejan de ser alentadoras.

El turismo es un área de crecimiento estratégico para México y el ecoturismo campesino con PSA ya tiene docenas, sin no centenares, de experiencias. El potencial del ecoturismo/PSA es grande. Una experiencia de Veracruz demuestra las posibilidades del ecoturismo en manos de las y los campesinos.

Una experiencia ejemplar de captura de carbono por grupos campesinos de Chiapas ya vende carbo-bonos a una empresa francesa.

Grupos campesinos en, o asociado con, reservas biológicas venden servicios (como guías de los sitios de la mariposa monarca), o tienen en diseño servicios (como la regulación del ciclo hidráulico).

El café bajo sombra es una estrategia con mucho potencial, ya que la mayoría de los campesinos del sur del país son pequeños cafecultores, y hay organizaciones fuertes ya de producción, certificación y venta del café orgánico — un producto relacionado al café bajo sombra.

Ejididos, particularmente del norte y centro del país, están vendiendo servicios cinegéticos con inversión de una parte de los ingresos en el mantenimiento del hábitat de los animales.

Grupos de indígenas de Chiapas y otras partes del país están negociando la estrategia de PSA en bioprospección.

En general, la estrategia del PSA tiene la virtud de representar una síntesis del ambientalismo con el liberalismo (y su empoderamiento de mecanismos del mercado), y hay indicios de que representa el futuro también. Depende de la premisa de que estamos en una transición paradigmática hacia la incorporación del capital natural en la teoría económica y la práctica política — el "enverdecimiento" (o "greening") de la economía —, como es la propuesta de algunos de los economistas y ecologistas mexicanos más prestigiados (y posiblemente cercanos al presidente electo en 2000).

En ese esquema esperanzado, sigue habiendo retos. El más importante de ellos es el hecho de que los "costos de transacción" de trabajo con grupos campesinos son más altos que aquellos asociados al trabajo con grandes propietarios o empresas tradicionales — por lo menos en este momento. Se ha visto que es un error, muchas veces, diseñar el proyecto de PSA en términos de una "comunidad" (que frecuentemente sufre divisiones sociales); en cambio, el trabajo con grupos voluntarios dentro de la comunidad, o región, propicia mejores resultados. También es importante reconocer que, en este momento de arranque de la mayoría de proyectos, muchas veces no se ha realizado ganancias importantes ni impactos sociales positivos; es el momento de inversión por parte de las y los campesinos y esto representa un punto de mucha tensión. En suma, los costos de transacción — la asistencia técnica, fortalecimiento organizacional, etc. — son aspectos

más o menos manejados todos los días en el mundo del desarrollo rural. Esta experiencia ofrece la esperanza de que sean gastos de inversión, que disminuyen con el tiempo.

Nos permitimos, como conclusión, imaginar el PSA como estrategia en la formación de un campesinado más próspero, si seguramente menos numeroso, ya que, como hecho ineludible, una gran parte de los recursos naturales empleados en las distintas estrategias de PSA son propiedad de la población campesina mexicana.